

EXAMEN JURISTAS 2011

1.- Indica la Constitución Española que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra:

- a. Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a las leyes.
- b. Alcanzen el nivel más alto posible.
- c. Sean reales y efectivas.

2.- La Constitución dispone que están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional:

- a. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
- b. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
- c. Las personas y órganos legitimados mediante ley orgánica.

3.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- a. El Tribunal de Cuentas dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de él en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- b. El Tribunal de Cuentas dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de él en el examen y comprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
- c. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4.- Los actos del Rey no refrendados:

- a. Serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 62 de la Constitución.
- b. Serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 65.2 de la Constitución.
- c. Carecerán de validez en todo caso, debiendo estar siempre refrendados.

5.- Señala la Constitución Española en su artículo 68 que la ley distribuirá el número total de Diputados:

- a. Asignando una representación máxima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
- b. Asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
- c. Asignando un número fijo de Diputados por cada circunscripción electoral.

6.- ¿Cuál es el plazo, pasado el cual, si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria para ser nombrado Presidente del Gobierno, se debe proceder a la convocatoria de nuevas elecciones?:

- a. Dos meses desde la tercera votación de investidura.
- b. Dos meses desde la segunda votación de investidura.
- c. Dos meses desde la primera votación de investidura.

7.- De las competencias enumeradas a continuación, no les corresponde a los Ministros, como titulares de un Departamento Ministerial:

- a. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.
- b. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
- c. Aprobar la propuesta de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Economía y Hacienda.

8.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la organización básica de los servicios comunes ministeriales, estarán integrados:

- a. En una Subsecretaría dependiente directamente del Ministro, a la que estará adscrita una Secretaría General Técnica y los demás órganos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento.
- b. En una Secretaría General Técnica.
- c. En una Secretaría General Técnica, o bien en aquellos órganos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento.

9.- Indica la Constitución Española que las Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal:

- a. Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas, sin limitación alguna, si tal facultad les ha sido atribuida por las Cortes Generales.
- b. Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando las Cortes Generales les hayan atribuido tal facultad.
- c. Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando el gobierno de la Nación les haya atribuido tal facultad.

10.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, no tienen una de las competencias siguientes:

- a. Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, constitucionalmente, al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

b. Nombrar a los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos de ámbito autonómico y provincial, no integrados en la Delegación del Gobierno.

c. Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de sus Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.

11.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en virtud del artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado:

a. Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del contrato de gestión del Organismo al que esté adscrito.

b. Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del órgano al que esté adscrito el Organismo.

c. Las Agencias Estatales dependen de un Ministerio o un Organismo autónomo, correspondiendo la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad al órgano de adscripción del Ministerio u organismo.

12.- El personal al servicio de los Organismos autónomos será:

a. Solamente funcionario, en los términos establecidos para la Administración General del Estado.

b. Funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado, pudiendo establecerse en su Ley de creación, de manera excepcional, determinadas peculiaridades.

c. Estatutario, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.

13.- Según establece el RD 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, de los órganos directivos siguientes indique cual no depende de la Subsecretaría de Interior:

a. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

b. La Dirección General de Tráfico.

c. La Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.

14.- Corresponde a la Subdirección General de Coordinación Territorial, dependiente de la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto, de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias, entre otras, las siguientes competencias:

a. La gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.

b. El seguimiento y supervisión, según modalidad, de los internos cuando pasen a

cumplir condena bajo el régimen abierto.

c. La organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo al régimen penitenciario de los centros penitenciarios.

15.- Indique cuál de las siguientes fechas se corresponde con la firma del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM):

a. 25 de marzo de 1957.

b. 25 de marzo de 1958.

c. 1 de enero de 1958.

16.- En cuál de los siguientes Tratados se incorpora, como política comunitaria, que la Unión tendrá el objetivo de promover el progreso económico y social, alcanzar un alto nivel de empleo, y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible:

a. Tratado de Maastricht de 1992.

b. Tratado de Ámsterdam de 1997.

c. Tratado de Niza de 2001.

17.- Según dispone el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea, la Unión respetará en todas sus actividades el principio de igualdad entre sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus Instituciones, Órganos y Organismos. Será ciudadano de la unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. En virtud de ello, la ciudadanía de la Unión:

a. Complementa a la ciudadanía nacional.

b. Se superpone a la ciudadanía nacional.

c. Se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.

18.- El Servicio Europeo de Acción Exterior es un órgano concebido para apoyar al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, creado por:

a. El Tratado de Maastricht.

b. El Acta única Europea.

c. El Tratado de Lisboa.

19.- Por Decisión 2002/107/JAI del Consejo de 28 de febrero de 2002, se acuerda crear en la Unión Europea una unidad encargada de reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia. ¿Cómo se denomina dicha unidad?

a. EUROPOL.

b. EUROJUST.

c. EUROSAT.

20.- De acuerdo con el artículo 1.1 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dicho Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de:

a. Los empleados públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

b. Los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

c. Los funcionarios públicos, los empleados públicos y el personal laboral incluidos en su ámbito de aplicación.

21.- Según dispone el articulado de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden, y en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. Esta actuación forma parte de las relacionadas en el Código de Conducta, dentro de los:

- a. Principios éticos.
- b. Principios rectores.
- c. Principios de conducta.

22.- El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante la ley 7/2007, de 12 de abril, establece respecto a las pruebas de acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales que:

- a. Quedarán exentos de realizar las pruebas de acceso, si poseen la titulación requerida.
- b. Podrán quedar exentos de la realización de las pruebas de acceso que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente,
- c. Deberán superar los procesos selectivos, sin excepción.

23.- De acuerdo con el artículo 79.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante la ley 7/2007, de 12 de abril, el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo:

- a. Será el que determine cada Departamento ministerial en función de sus necesidades.
- b. Está establecido en un plazo mínimo de dos años.
- c. Vendrá establecido por las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.

24.- El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante la ley 7/2007, de 12 de abril, dispone que los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto a su Administración de origen en la situación administrativa de:

- a. Servicio en otras Administraciones Públicas.
- b. Servicios especiales.
- c. Servicio activo.

25.- El artículo 82 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, regula la movilidad por razón de violencia de género. El traslado de una funcionaria como consecuencia del procedimiento de movilidad por razón de violencia de género tendrá la consideración de:

- a. Traslado voluntario.
- b. Traslado forzoso.
- c. Traslado pactado.

26.- El artículo 84.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante la ley 7/2007, de 12 de abril, contiene la posibilidad de movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. Indique de los siguientes, cuál es el instrumento preferente por el que opta el Estatuto para establecer medidas de movilidad interadministrativa:

- a. Concurso Marco Interadministrativo de Traslados.
- b. Convenio de Conferencia Sectorial.
- c. Permutas.

27.- Según se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante la ley 7/2007, de 12 de abril, las cantidades destinadas a financiar aportaciones de los empleados públicos a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, tendrán, a todos los efectos, la consideración de:

- a. Retribuciones debidas.
- b. Retribuciones definidas.
- c. Retribuciones diferidas.

28.- Establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que para autorizar la compatibilidad de actividades públicas es requisito necesario:

- a. Que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General.
- b. Que la cantidad percibida por ambos puestos de trabajo no supere en un 30% la prevista para el cargo de Director General.
- c. Que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere en un 10% la prevista para el cargo de Director General.

29.- Señale que actividad queda exceptuada del régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, si es desarrollada por el personal incluido en su ámbito de aplicación:

- a. Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la citada ley.
- b. La participación ocasional o asidua en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
- c. La producción literaria, aunque se origine como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

30.- Será competente para ordenar la incoación de expediente disciplinario a los funcionarios de la Administración del Estado, según lo estipulado en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado:

- a. El Ministro del Departamento donde esté destinado el funcionario.
- b. El Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo

caso.

c. El Subsecretario del Departamento en que este destinado el funcionario, a propuesta de los Directores Generales.

31.- La suspensión provisional de funciones como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, no podrá exceder, según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público de:

- a. Tres meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
- b. Un año, en todo caso.
- c. Seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

32.- Recoge el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado que en el supuesto de que una persona tenga derecho al cobro de más de una prestación de Clases Pasivas y siendo estas incompatibles en su percibo simultáneo, el interesado:

- a. Podrá ejercer un derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente, sin que este derecho pueda ejercerse más de una vez, con carácter general.
- b. Percibirá la de mayor cuantía.
- c. Podrá ejercer el derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente, pudiendo ejercer éste cuantas veces lo considere oportuno.

33.- De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en la Administración General del Estado, se creará la figura de:

- a. El Defensor del ciudadano ante las Administraciones Públicas.
- b. El Defensor del usuario de la administración electrónica.
- c. El Defensor del ciudadano ante el uso de la administración electrónica.

34.- Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos, que según lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, podrán admitir:

- a. Únicamente documentos electrónicos normalizados, dirigidos a la Administración pública titular del registro.
- b. Documentos electrónicos normalizados y cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigidos a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración titular del registro.
- c. Exclusivamente documentos electrónicos normalizados dirigidos a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración General del Estado.

35.- El expediente electrónico, según definición de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, es:

- a. El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.
- b. El conjunto de documentos electrónicos, debidamente foliados y autenticados correspondientes a un procedimiento administrativo siempre y cuando no formen parte de distintos expedientes.

c. El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, siempre que su contenido se refiera a actos administrativos iniciados de oficio.

36.- La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se denomina, según recoge el Art. 6 de la Ley Orgánica 3/2007, 22 marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres :

- a. Discriminación directa por razón de sexo.
- b. Discriminación indirecta por razón de sexo.
- c. Acción negativa por razón de sexo.

37.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señala que la funcionaria víctima de violencia de género tendrá, entre otros, el derecho:

- a. A la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
- b. A la reducción de su jornada de trabajo hasta un máximo del 50% de su tiempo.
- c. A la elección de las vacaciones anuales, permisos y licencias de forma preferente.

38.- Señale qué órgano y en qué momento deberá aprobar el Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, previsto en la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo:

- a. El Gobierno, anualmente.
- b. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, anualmente.
- c. El Gobierno, al inicio de cada legislatura.

39.- Según dispone la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el presupuesto del Estado, los créditos se especificarán, con carácter general:

- a. A nivel de concepto.
- b. A nivel de artículo.
- c. Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, sin establecerse una especificación con carácter general.

40.- Indica el artículo 36 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que elevará el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado al Gobierno:

- a. El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
- b. El Ministro de Economía y Hacienda.
- c. Los distintos Ministerios, conteniendo las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de sus departamentos, organismos autónomos y entidades a ellos adscritos.

41.- Según la Ley General Presupuestaria, tienen la consideración de fondos de carácter extrapresupuestario permanente:

- a. Los Anticipos de tesorería.

- b. Los Anticipos de caja fija.
- c. Los Fondos a justificar.

42.- Según establece el Artículo 13 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, en qué plazo la Intervención ha de llevar a cabo la fiscalización del expediente, cuando haya sido declarado urgente su tramitación:

- a. Diez días, contados desde el siguiente a la fecha de recepción.
- b. Cinco días, contados desde el siguiente a la fecha de recepción.
- c. Cinco días, contados desde el mismo día de recepción.

43.- El acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, según el artículo 73 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, es:

- a. Aprobación del gasto.
- b. Compromiso del gasto.
- c. Ordenación del gasto.

44.- Los presidentes o Directores de los organismos autónomos del Estado, en materia de gestión de gastos, tienen las siguientes competencias:

- a. Exclusivamente, aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo así como reconocer las obligaciones correspondientes.
- b. Aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.
- c. Únicamente aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo.

45.- Dispone el Art. 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. General Presupuestaria que, con carácter general, los perceptores de órdenes de pagos a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas, en el plazo de:

- a. Tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.
- b. Tres meses, en todos los casos.
- c. Seis meses, en todos los casos.

46.- Las sociedades mercantiles estatales, a los efectos de la Ley General Presupuestaria, integran:

- a. El sector público administrativo.
- b. El sector público empresarial.
- c. El sector público fundacional.

47.- La fase que inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal, se denomina en la Ley General Presupuestaria:

- a. Compromiso de gasto.
- b. Retención de crédito.
- c. Aprobación del gasto.

48.- Es competencia de la Administración Penitenciaria, según indica el artículo 21 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio:

- a. La ejecución de las medidas de seguridad no privativas de libertad.
- b. La ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria.
- c. La ejecución de las medidas de seguridad, tanto de medidas privativas como no privativas de libertad.

49.- El cumplimiento y ejecución de las formas sustitutivas de ejecución penal - suspensiones y sustituciones de condena- competencia de la Administración Penitenciaria, se encuentran regulados en:

- a. El Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.
- b. El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio,
- c. El Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo.

50.- Las relaciones del derecho penitenciario con el derecho administrativo vienen expresamente recogidas, entre otros preceptos, en:

- a. El artículo 54 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, al establecerse que la Administración Penitenciaria garantizará la libertad religiosa de los internos conforme a lo preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- b. El artículo 132 del Reglamento Penitenciario, al referir que la potestad disciplinaria que ejerce la Comisión Disciplinaria deberá adecuarse a los principios recogidos en el Título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- c. El artículo 267 del Reglamento Penitenciario, que regula el régimen jurídico de los órganos colegiados de los centros penitenciarios, y remite sus normas de funcionamiento a lo establecido en el Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

51.- El Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, modifica el apartado segundo del artículo 268 del Reglamento Penitenciario de 1996, estableciendo que:

- a. Las Juntas de Tratamiento u órganos colegiados equivalentes se reunirán una vez al mes en sesión ordinaria, previa aprobación del Centro Directivo.
- b. Las Juntas de Tratamiento u órganos colegiados equivalentes se reunirán una vez al mes en sesión ordinaria, salvo que lo hagan con mayor periodicidad, previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y comunicación al Centro Directivo.
- c. Las Juntas de Tratamiento u órganos colegiados equivalentes se reunirán una vez al mes en sesión ordinaria, salvo que lo hagan con mayor periodicidad, en función de determinadas características, previa aprobación del Centro Directivo.

52.- Las Instrucciones y Órdenes de Servicio dictadas por el Centro Directivo (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) se publicarán en el periódico oficial que corresponda:

- a. En todo caso.
- b. Cuando se estime conveniente, por razón de los efectos que pueda producir o de los destinatarios.
- c. En ningún caso.

53.- Indique la respuesta correcta:

- a. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se imponen, exteriorizada en un hecho previsto como delito, por lo que no estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del sometido, sino a la salvaguarda de terceros.
- b. Las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del sometido, por mandato constitucional.
- c. Por mandato constitucional solo las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del penado.

54.- Según la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria, los derechos reconocidos a los internos podrán ser suspendidos:

- a. De forma parcial y temporalmente, en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la Administración Penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
- b. De forma total y temporalmente, en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la Administración Penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
- c. De forma parcial sin límite temporal, en los supuestos de graves alteraciones del orden en el centro, que obliguen a la Administración Penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

55.- El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de determinadas penas y medidas, define a los establecimientos penitenciarios como:

- a. Aquellos centros de la Administración Penitenciaria destinados al cumplimiento de penas y medidas de seguridad privativas de libertad y de custodia y retención de presos y detenidos.
- b. Aquellos centros de la Administración Penitenciaria de régimen ordinario.
- c. Aquellos centros de la Administración Penitenciaria destinados al cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad.

56.- Recoge el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, que los internos trabajadores serán clasificados en las siguientes categorías, que serán tenidas en cuenta en la fijación del módulo retributivo:

- a. Aprendiz y oficial.
- b. Ayudante y especialista.
- c. Operario base y operario superior.

57.- La extinción de la relación laboral penitenciaria, en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, será acordada:

- a. Por el Director del centro, como delegado del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, previa valoración de las circunstancias de cada caso.
- b. Por el Consejo de Dirección como órgano supremo de los existentes en el centro penitenciario.
- c. Por el Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, al corresponderá la dirección y gestión de los trabajos y actividades comerciales, industriales y cualesquiera necesarios para la actividad del Organismo.

58.- Entre las condiciones que deben cumplir los permisos de salida extraordinarios concedidos a internos clasificados en primer grado de tratamiento penitenciario, figura en el Reglamento Penitenciario en vigor:

- a. La autorización expresa del Juez de Vigilancia Penitenciaria que corresponda.
- b. La autorización expresa del juez ejecutor de su causa penal.
- c. La autorización del Director del Centro, previo acuerdo de la Junta de Tratamiento, tras la valoración de los motivos de la petición.

59.- En la Ley Orgánica General Penitenciaria se indica que los servicios médicos de profesionales ajenos a las instituciones penitenciarias:

- a. Pueden ser exigidos por el interno y los gastos que se deriven serán sufragados por la administración del centro.
- b. Podrán ser solicitados por el interno y los gastos a su costa, excepto que por razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.
- c. Únicamente la dirección del centro podrá solicitar la asistencia de profesionales médicos ajenos a la institución, previo informe motivado de los servicios médicos del mismo, sufragando los gastos la administración.

60.- La Ley Orgánica General Penitenciaria refiere que las funciones regimentales de los establecimientos de cumplimiento deben ser consideradas:

- a. Como fines dirigidos a la reinserción de los internos.
- b. Como medios obligados para facilitar la convivencia.
- c. Como medios y no como finalidades en sí mismas.

61.- El régimen disciplinario de los internos establece que desde la fecha en que se hubiera cometido una infracción, las faltas disciplinarias muy graves, graves y leves prescriben respectivamente:

- a. A los dos meses, un mes y quince días.
- b. A los tres años, dos años y seis meses.
- c. A los tres años, dos años y un año.

62.- La definición de crimen organizado como asociación de tres o más personas para realizar de forma permanente o reiterada alguno de los siguientes delitos: secuestro,

prostitución, delitos patrimoniales, contra el derecho de los trabajadores, tráfico de especies de flora, tráfico y depósito de armas, de material nuclear, delitos contra la salud pública y otros, se recoge:

- a. En el Código Penal.
- b. En la Convención de Palermo de las Naciones Unidas.
- c. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

63.- Entre las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los establecimientos penitenciarios, se indican en el artículo 65 del Reglamento Penitenciario modificado por Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, las de:

- a. La correcta clasificación del penado y su separación de los preventivos
- b. Los programas de intervención específica llevados a cabo por equipos técnicos estables.
- c. Los cambios de celda y la asignación adecuada de destinos.

64.- En virtud de lo recogido en el Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, los recuentos, cacheos, requisas y cambios de celda de la población reclusa:

- a. Se ajustarán, en cuanto a su intensidad, a la potencial peligrosidad de los internos a los que se les aplique.
- b. Se ajustarán, en cuanto a su intensidad, al grado de tratamiento en que se encuentren los internos.
- c. Se ajustarán, en cuanto a su intensidad, al fichero de seguimiento en que se encuentre el interno.

65.- El régimen ordinario se aplicará, como indica el Reglamento Penitenciario vigente:

- a. A los penados clasificados según el principio de flexibilidad establecido en el Artículo 100.2 del RP.
- b. A los penados clasificados en Tercer Grado, siempre que sea en la modalidad prevista en el Artículo 82.1 del RP.
- c. A los penados clasificados en Segundo Grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.

66.- Las secciones abiertas, según articulado del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, son:

- a. Centros de Inserción Social.
- b. Unidades Dependientes.
- c. Establecimientos de Régimen Abierto.

67.- En el régimen de vida regulado conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria:

- a. Se podrán establecer limitaciones regimentales iguales a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción en celda.
- b. Se diseñará un programa de intervención específico que garantice la atención personalizada a los internos que se encuentren en dicho régimen.

c. Se atenderá exclusivamente a la limitación de actividades comunes y un mayor control y vigilancia sobre los internos.

68.- La revisión de modalidad de vida de un interno menor de veintiún años que supere los seis meses de permanencia en la misma, según dispone el Artículo 92.4 del Reglamento Penitenciario, modificado por el Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo:

- a. Será autorizada por la Junta de Tratamiento previo informe del equipo técnico.
- b. Será acordada por la Junta de Tratamiento y autorizada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
- c. Será remitida al Centro Directivo para su resolución.

69.- Según el Artículo 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a. El tratamiento penitenciario se basará, entre otros, en el estudio del sistema dinámico-motivacional del interno.
- b. El tratamiento penitenciario será complejo, integrando varios métodos en una dirección de conjunto.
- c. El tratamiento penitenciario no guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal del interno.

70.- Según el artículo 24.5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en el expediente personal del penado se extenderá la oportuna diligencia de libertad definitiva:

- a. Tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva al tribunal sentenciador y al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- b. Exclusivamente si la liberación tiene lugar en el centro penitenciario.
- c. Tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva solo al Tribunal sentenciador.

71.- En relación con las actas de los órganos colegiados de los establecimientos penitenciarios y según lo establecido en el Artículo 267 del Reglamento Penitenciario:

- a. Figurarán los votos contrarios al acuerdo adoptado.
- b. Figuraran las abstenciones de sus miembros y los motivos que las justifiquen.
- c. En ningún caso figurarán los votos contrarios al acuerdo adoptado, salvo que alguno de los miembros del órgano colegiado formule voto particular.

72.- De acuerdo con el articulado del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, ¿Cuál de las siguientes funciones no puede corresponder al Jefe de Servicios?:

- a. Ordenar la suspensión de las comunicaciones orales, por propia iniciativa, cuando

los comunicantes no observen un comportamiento correcto.

b. Autorizar los cacheos con desnudo integral por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del establecimiento.

c. Recabar con carácter provisional el auxilio de las fuerzas de Seguridad de guardia en el establecimiento en los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o para las instalaciones del centro.

73.- La elevación hasta 40 años, en determinados casos, del límite máximo del cumplimiento de las penas de nuestro vigente Código Penal fue establecida por:

a. Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.

b. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

c. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

74.- De acuerdo con el principio *non bis in ídem*, ¿un funcionario condenado por malversación de caudales públicos no podrá ser sancionado disciplinariamente por la Administración en la que sirva?:

a. Efectivamente, no podrá ser sancionado en ningún caso.

b. Es falso, podría ser sancionado disciplinariamente.

c. Dependiendo de la cuantía malversada no podría ser sancionado disciplinariamente.

75.- Si una sociedad es condenada a una multa por cuotas o proporcional, la clase de delito, por razón de la gravedad, será:

a. Menos grave,

b. Grave.

c. Menos grave o grave, según la importancia cuantitativa de tal multa.

76.- Indique si la afirmación "Las faltas de amenazas solamente serán perseguibles mediante denuncia del agraviado o su representante legal" es correcta:

a. Sí es correcta, en todo caso.

b. No es correcta, pues puede no exigirse tal denuncia, dependiendo esta circunstancia de la relación entre la víctima y el reo.

c. No es correcta, pues pueden ser perseguidas de oficio en todo caso.

77.- La apología, en nuestro Derecho Penal:

a. Sólo será delictiva como forma de provocación y se castigará cuando la Ley así lo prevea.

b. Sólo se castigará cuando incite indirectamente a cometer un delito o falta.

c. Sólo se castigará cuando a ella le hubiese seguido la perpetración del delito.

78.- A los efectos del Código Penal, se considerará funcionario público:

a. Al que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

b. Toda persona incorporada a la Administración Pública mediante una relación de servicios profesionales y retribuidos.

c. Quien adquiere mediante la superación de pruebas de selección y cursos formativos, en su caso, la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

79.- La privación de la patria potestad, en nuestro derecho penal:

a. Es una pena grave.

b. Es una pena menos grave.

c. No es una pena, es una regla de conducta de las tipificadas en el Artículo 83.1 del Código Penal.

80.- Si un delito tuviera asignada la pena de suspensión de empleo y cargo público entre uno y seis años, y hubiera que aplicar la pena superior en grado, el límite superior del marco penológico sería:

a. Ocho años de suspensión de empleo y cargo público.

b. Ocho años y medio de suspensión de empleo y cargo público.

c. Seis años de suspensión de empleo y cargo público.

81.- Las reglas de conducta contenidas en el Artículo 83 del Código Penal que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiera imponer al decretar la libertad condicional de los penados:

a. Son *numerus clausus*.

b. Son *numerus apertus*.

c. No pueden ser impuestas tales reglas de conducta a los penados en situación de libertad condicional, sino a los penados a los que se les ha suspendido la condena privativa de libertad.

82.- Practicar un aborto sin haber transcurrido el periodo de espera contemplado en la legislación:

a. No es delito, es una falta.

b. Es delito respecto del que lo practica.

c. Es delito respecto del que lo practica y la mujer embarazada.

83.- En los delitos de descubrimiento y revelación de secretos regulados en el Capítulo I del Título X del Libro II del Código Penal, indique la respuesta correcta:

a. El perdón del ofendido o su representante legal extingue la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 130.1.5º, párrafo segundo del Código Penal.

b. No se encuentran protegidos los datos reservados de personas jurídicas.

c. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer tales delitos será castigada con la pena inferior en dos grados a la señalada para el autor del delito consumado.

84.- Indique qué frase contiene la proposición correcta:

a. Tiene un marco penológico más grave el robo en una casa deshabitada que en un local comercial abierto al público.

- b. Tiene el mismo marco penológico el robo en una casa deshabitada que en un local comercial abierto al público.
- c. Tiene un marco penológico más leve el robo en una casa deshabitada que en un local comercial abierto al público.

85.- Favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será castigado con penas superiores en grado a las señaladas en el artículo 368 del Código Penal, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a. Las sustancias referidas se faciliten a menores de 21 años.
- b. Las sustancias referidas se adulteren, manipulen o mezclen.
- c. La conducta descrita tenga lugar en un establecimiento penitenciario.

86.- En la fijación de la pena en el delito de estafa, se tendrá en cuenta:

- a. La intencionalidad del autor del delito.
- b. El importe de lo defraudado, el quebranto económico del perjudicado, las relaciones de éste con el defraudador, los medios empleados por éste, y otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad del delito.
- c. El valor de la defraudación, si la cuantía de lo defraudado no excede de 300 euros.

87.- Quien, en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de:

- a. Prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses.
- b. Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
- c. Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

88.- La máxima pena privativa de libertad que se puede imponer por el delito de quebrantamiento de condena, cualquiera que sea su modalidad, de las establecidas en el artículo 469 del Código Penal, es:

- a. 6 años.
- b. 4 años.
- c. 2 años.

89.- El funcionario de instituciones penitenciarias que imponga a los reclusos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos un rigor innecesario será castigado con:

- a. Multa de doce a veinticuatro meses.
- b. Pena de prisión de uno a tres años.
- c. Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

90.- En el delito de desorden público existe un tipo agravado en la pena para uno de los siguientes supuestos, contemplado en el artículo 557 del Código Penal:

- a. Los que se produjeren con ocasión de la celebración de espectáculos o eventos que congreguen a gran número de personas.
- b. Los que se produzcan en sitios cerrados.

c. Los que tengan lugar en actos de campaña electoral.

91.- En el delito contra la Hacienda Pública, el que regularice su situación tributaria en relación con las deudas a que se refiere el artículo 305 del Código Penal, con anterioridad a que el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica interponga querrela, tiene los siguientes efectos:

- a. Se rebajaría la pena en caso de sentencia condenatoria.
- b. Se queda exento de responsabilidad penal.
- c. No tiene ninguna relevancia a efectos penales, actuándose por el Ministerio fiscal y el Juez de Instrucción en las diligencias oportunas.

92.- ¿Cuál de los siguientes órganos judiciales no es competente para conocer en el orden penal?:

- a. El Juzgado de Paz.
- b. El Tribunal Superior de Justicia de las CCAA.
- c. El Tribunal Constitucional.

93.- Sobre la competencia territorial de los juzgados de lo penal, la regla general viene determinada por el siguiente principio:

- a. La del lugar de comisión del delito o falta.
- b. La del domicilio del autor del delito o falta.
- c. La del domicilio de la víctima del delito o falta.

94.- El recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma procede frente a las siguientes resoluciones:

- a. Únicamente sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral.
- b. Sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia, y las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o segunda instancia.
- c. Sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única instancia.

95.- En el Título XI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -De la conclusión del sumario y del sobreseimiento- se recoge que procede acordar el sobreseimiento provisional:

- a. Cuando resulte debidamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación de la causa, pero el delito esté prescrito.
- b. Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.
- c. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.

96.- Establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el procedimiento abreviado se aplica a:

- a. Todos los delitos castigados con penas de naturaleza distinta a la privativa de

libertad, por cuantía inferior a 50.000 euros.

- b. Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años.
- c. Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años.

97.- La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus, indica que el procedimiento de habeas corpus puede ser instado por:

- a. Únicamente por el privado de libertad.
- b. Únicamente por el Defensor de Pueblo, el Ministerio Fiscal y el privado de libertad.
- c. Por el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad.

98.- El computo de los plazos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuando dichos plazos se efectúen por días, se entenderán, con carácter general, referidos a:

- a. Días naturales.
- b. Días hábiles.
- c. Se aplica el criterio general recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y Procedimiento Administrativo Común, al no referirse criterio al respecto en la Ley 30/2007.

99.- Indica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que los contratos que celebren los poderes adjudicatarios se perfeccionan:

- a. Con la adjudicación definitiva.
- b. Con su formalización.
- c. Cuando están totalmente ejecutados.

100.- Refiere la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto:

- a. Los servicios de transportes vía terrestre y aéreo.
- b. Los servicios de publicidad.
- c. Los servicios de seguros.

101.- Dispone la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que se consideran contratos menores:

- a. Los contratos de importe inferior a 30.000 euros cuando se trate de contratos de obras.
- b. Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras.
- c. Los contratos de importe inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministros.

102.- A tenor de lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, es requisito previo para proceder a una expropiación forzosa:

- a. La declaración de utilidad pública del fin al que haya de afectarse el bien expropiado mediante ley aprobada en Cortes.
- b. La declaración de necesidad de ocupación pública del objeto expropiado.
- c. La declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.

103.- Según recoge la Ley de Expropiación Forzosa, el acto que inicia el expediente expropiatorio es:

- a. El acuerdo de necesidad de ocupación.
- b. La declaración de utilidad pública o interés social.
- c. El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se incluyen los bienes objeto de la expropiación.

104.- Dispone la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que los títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles titularidad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, tienen la consideración de:

- a. Bienes de dominio público.
- b. Bienes demaniales.
- c. Bienes de dominio privado o patrimoniales.

105.- Indique cuál de los siguientes organismos o entidades no está sometido al control financiero permanente de la Intervención General de la Administración del Estado, según dispone el artículo 158 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

- a. Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado.
- b. Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- c. Las entidades públicas empresariales no dependientes de la Administración General del Estado.

106.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo:

- a. Cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular.
- b. Los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
- c. Únicamente la persona acosada.

107.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge en su Título IV las reglas que deben seguirse para determinar la lengua de los procedimientos administrativos. En los procedimientos administrativos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades

Locales:

- a. El uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
- b. El uso de la lengua se ajustará a lo que determine el interesado.
- c. El uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

108.- En los procesos de Reclamación previa al ejercicio de acciones en la vía judicial civil, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación previa:

- a. Si la Administración Pública de que se trate no notificara su decisión en el plazo de un mes.
- b. Si la Administración Pública de que se trate no notificara su decisión en el plazo de dos meses.
- c. Si la Administración Pública de que se trate no notificara su decisión en el plazo de tres meses.

109.- La Constitución Española permite que el Estado dicte leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de dichas Comunidades, cuando:

- a. Lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por el Gobierno.
- b. Lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.
- c. Lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado.

110.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluye entre los principios aplicables a la potestad sancionadora, el principio de irretroactividad. En aplicación de este principio:

- a. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo si así lo solicitara el presunto infractor.
- b. Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo en ningún caso.
- c. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978.

111.- El derecho que tienen los particulares de reclamar por las lesiones que aquéllos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, prescribe:

- a. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
- b. Al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de

manifestarse su efecto lesivo.

c. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

112.- Según el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los proyectos de Reglamentos deberán ser informados por:

a. El Subsecretario del Departamento que elabore la propuesta.

b. Por el Ministerio de la Presidencia del gobierno a propuesta de cada Departamento.

c. Por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del informe del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos.

113.- Enuncia la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que cuando la norma reglamentaria que se elabore afecte a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas:

a. Será necesario informe preceptivo de las Comunidades Autónomas afectadas.

b. Será necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

c. Será necesario informe previo de las comunidades autónomas afectadas y del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

114.- En relación con la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos que tiene la Administración, señale la afirmación correcta:

a. Ante un acto administrativo desestimado por silencio, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

b. El plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa al interesado será de un año.

c. En los casos de desistimiento de la solicitud se exceptúa la obligación de resolución expresa.

115.- ¿En qué caso los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva, según se recoge en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?:

a. Cuando no afecten a derechos subjetivos de los destinatarios.

b. Cuando se trate de actos dictados por el Consejo de Ministros.

c. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

116.- En relación al recurso potestativo de reposición, cuál de las siguientes alternativas es la correcta:

a. Se interpone contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa.

b. Se interpone ante el órgano administrativo superior al que hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

c. Se interpone necesariamente, para acudir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

117.- Queda excluida del ámbito regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios:

- a. En cualquier caso.
- b. Siempre que los empresarios revistan forma jurídica de sociedad.
- c. Siempre que los empresarios queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.

118.- Según el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan, entre otras, por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siempre que:

- a. Sea su objeto lícito, con independencia del contenido de las disposiciones que contenga.
- b. Sea su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos que sean de aplicación al trabajador.
- c. Esté formalizado por escrito y entregada una copia básica del mismo a los representantes legales de las partes.

119.- Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa, si bien:

- a. El acuerdo deberá ser por un periodo mínimo de dos años y se formalizará por escrito.
- b. El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito.
- c. El acuerdo, siempre que se formalice por escrito tendrá la duración que libremente se fije por las partes, sin más limitaciones.

120.- En el ejercicio del derecho de huelga, cuando la huelga afecte a empresas encargadas de la prestación de cualquier clase de servicio público:

- a. El preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de quince días naturales.
- b. El preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la Inspección de trabajo habrá de ser, al menos, de diez días naturales.
- c. El preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales.